

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 14
O R D I N A R I A
MARTES 31 DE ENERO DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cinco minutos del martes treinta y uno de enero de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número trece, ordinaria, celebrada el lunes treinta de enero de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación para el martes treinta y uno de enero de dos mil doce:

II. 3. 155/2007

Acción de inconstitucionalidad 155/2007 promovida por el Procurador General de la República en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, por la invalidez de los artículos 72, fracción V y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de la entidad el ocho de junio de dos mil siete. En el proyecto formulado por el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se propuso: *“PRIMERO. Es procedente la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la validez de los artículos 72, fracción V, párrafo segundo, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de dicha entidad, el ocho de junio de dos mil siete. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 68, fracción XII, y 72, fracción V, párrafo primero, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial de dicha entidad, el ocho de junio de dos mil siete. CUARTO. La declaratoria de invalidez de las normas impugnadas surtirá efectos en términos del último considerando de esta ejecutoria. QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Gobierno del*

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

Estado de Yucatán y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a la estimación del Tribunal Pleno el considerando quinto “1. Análisis de la violación a la libertad de trabajo (artículo 5º constitucional)”.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano indicó que se propone declarar la invalidez de los artículos 72, fracción V, párrafo primero, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, al ser fundados los conceptos de invalidez en los que se aduce que las disposiciones impugnadas son contrarias al principio pro persona al facultar a las autoridades administrativas para imponer una sanción como pena, consistente en obligar a los infractores a la realización de trabajos en instituciones públicas, educativas, de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales, lo que contraviene lo previsto en los artículos 5º y 21 de la Constitución Federal.

Precisó que se ajustaría el proyecto en relación con la fracción XIV del artículo 68 de la citada ley que fue analizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la entidad del siete de mayo de dos mil nueve, ya que debió haberse analizado el texto correspondiente al momento de su impugnación, dada su naturaleza de “norma administrativa sancionadora”.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó a favor de la propuesta pero en contra de las consideraciones que la sustentan. Dio lectura al segundo párrafo de la página cuarenta y ocho del proyecto, estimando que la propuesta respectiva elabora un análisis de la reforma penal de dos mil ocho y precisa qué condición de las sanciones administrativas se entiende de acuerdo a los criterios de política criminal, lo que no compartió.

Señaló que de la lectura del proceso legislativo se desprende una clara distinción entre la materia penal y la materia administrativa, además de que en materia de sanciones administrativas se encuentran las figuras del arresto y de la multa, pero no de la subsidiaridad, complementariedad o determinación final en una escala de penas en razón del trabajo forzado, considerando que la disyuntiva o posibilidad de desplazar una de otra, es por razón del arresto.

Estimó que se está ante una aplicación del artículo 1º, párrafo tercero, constitucional que prevé que se deben analizar los actos de autoridad impugnados en determinado proceso de control de constitucionalidad a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Precisó que en el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se

determina que el trabajo en favor de la comunidad, debe ser establecido única y exclusivamente como sanción de carácter jurisdiccional por el juez y no como una sanción de carácter administrativo, por lo que consideró que sin necesidad de entrar al tema de la jerarquía de la Constitución y de los tratados internacionales, es más benéfica la posición prevista en dichos ordenamientos internacionales en favor de la persona.

Recordó la posición que sostuvo en relación con la constitucionalidad del traslado de los reos de un centro cercano a su domicilio hacia otro, respecto de lo que afirmó que no se necesitaba acudir a los tratados internacionales, porque la determinación constitucional de compurgar las penas cerca del domicilio para lograr la reinserción, era lo más favorable para aquéllos.

Indicó que en el caso concreto, los tratados internacionales son más favorables en términos de la privación o la afectación a la libertad del trabajo y la percepción de una justa retribución a la realización de un trabajo, además de que sólo pueden ser impuestos a través de una sanción penal, siendo ésta la interpretación con la que se manifestaría de acuerdo.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano precisó el contenido del artículo 6º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica,

indicando que en su proyecto sostiene que no se está ante un trabajo forzoso sino que éste es opcional.

Asimismo, dio lectura al artículo 21 del proyecto del Convenio 29 de la Organización del Trabajo en el que se define el trabajo forzado, así como al artículo 6º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio y que en los países donde ciertos delitos tengan señalada la pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzados, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíba el cumplimiento de dicha pena impuesta por un juez o un tribunal competente.

En ese orden de ideas, señaló que de acuerdo a las convenciones internacionales, el trabajo forzoso sólo puede ser impuesto como pena pública por un juez, y que no se refiere a ciertos trabajos como potestad de imposición o aplicación por la autoridad administrativa sancionadora.

Indicó que la fracción IV del artículo 21 constitucional hace referencia a una sanción constitucionalmente prevista como alternativa; sin embargo, el precepto impugnado dispone que se impondrá trabajo forzoso al que reincidentemente deje de vigilar el cumplimiento de las normas protectivas que se hayan determinado para sus hijos, por lo que al no existir alternatividad, estimó que debe declararse su inconstitucionalidad.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó a favor del sentido del proyecto pero en contra de sus consideraciones, ya que no obstante que reconoce que la restricción a la libertad de trabajo impuesta por los tratados internacionales es menor a la establecida en la Constitución Federal, privilegia lo dispuesto en esta última, pretendiendo aplicar el principio pro persona a la restricción prevista por el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, sosteniendo que dicha restricción sólo será válida si prevé el trabajo a favor de la comunidad como una sanción alternativa que posibilite su aplicación excepcional por la autoridad administrativa.

Consideró que el principio pro persona, debe ser aplicado al derecho fundamental de que se trate, como es el caso de la libertad de trabajo, favoreciendo la protección más amplia a las personas de acuerdo con lo previsto en el artículo primero constitucional, por lo que si los tratados internacionales protegen más ampliamente dicha libertad al restringir en menor medida su ejercicio, debe darse prioridad a lo dispuesto en éstos.

Manifestó que los diversos tratados internacionales prohíben, por una parte, el trabajo forzoso u obligatorio y permiten, por otra, los trabajos forzados entre los que se encuentran los trabajos personales y los que se hacen a favor de la comunidad derivados de la comisión de un delito e impuestos por una autoridad judicial.

En ese orden de ideas, señaló que el artículo 5º constitucional permite que la libertad de trabajo pueda ser vedada por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros y por resolución gubernativa cuando se ataquen derechos de la sociedad, así como el caso a que se refiere el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, cuando se faculta a la autoridad administrativa para imponer el trabajo a la comunidad como sanción derivada de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía.

De lo anterior, sostuvo que los propios tratados internacionales otorgan una protección más amplia a la libertad de trabajo, por lo que estimó que el precepto impugnado es inconstitucional al contemplar a los trabajos a favor de la comunidad como una sanción que pueda imponer la Secretaría de Salud por infracciones administrativas, siendo que esta restricción sólo puede derivar de una determinación vinculada con la comisión de un delito emitida por autoridad judicial.

Agregó que no es necesario el análisis que hace el proyecto respecto de diversos ordenamientos como la Ley de Prevención de las Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco de Yucatán, ni siquiera en vía de suplencia al no existir una causa de pedir, además de que no guardan relación con los preceptos impugnados.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó a favor de la propuesta del proyecto, pero en contra de que se

confronten los tratados internacionales mencionados con lo previsto en el artículo 21 constitucional, pues debía analizarse, en principio, si el concepto de “trabajo a favor de la comunidad”, puede identificarse con el diverso de “trabajo forzoso”, para confrontar el texto constitucional con los citados tratados internacionales.

Consideró que dichos tratados buscan evitar la esclavitud, lo que es distinto a lo previsto en el artículo 21 constitucional, recordando que dicho numeral de manera alguna la autoriza.

Por ende, señaló que el respectivo análisis sólo debía confrontarse con la Constitución y no con los tratados internacionales pues no los contravienen; además de que dichos tratados no debían ser casuísticos para referirse a las otras posibilidades del Estado, pues la imposición de sanciones administrativas es una posibilidad de todo Estado, sin que se pueda caer en el supuesto de permitir, de manera alguna, una esclavitud simulada.

En ese orden, estimó importante determinar si “trabajo en favor de la comunidad”, puede o no identificarse con los trabajos forzados prohibidos en los tratados internacionales, considerando que se trata de supuestos diversos que no se contraponen, manifestando interrogantes respecto de que esto se permita sólo cuando no sean alternativos, toda vez que se trata de una sanción excepcional, que no se impone directamente, sino solamente en caso de reincidencia.

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

Por tanto, consideró justificada la disposición constitucional sin confrontarse con los tratados internacionales, pues no se contraponen, sino que se complementan, agregando que parecería que uno de los puntos resolutivos podría ser contradictorio.

El señor Ministro Cossío Díaz reconoció la claridad del tema planteado por el señor Ministro Aguilar Morales. Recordó que el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Forzoso no prohíbe de manera absoluta el trabajo forzoso, por lo que no se refiere a la esclavitud, pues sería como sostener que la Organización Internacional del Trabajo la permitió en determinados supuestos.

Consideró que es clara la distinción entre la esclavitud y el trabajo, recordando el contenido del artículo 11.1 del citado Convenio.

Precisó que los trabajos forzosos y los trabajos obligatorios son los que no se llevan a cabo voluntariamente. Señaló que la alternatividad en la imposición de las sanciones no genera la voluntariedad pues se trata de dos categorías distintas.

En relación con lo señalado por el señor Ministro Valls Hernández indicó que de acuerdo a la condición general, no se puede imponer trabajo no voluntario alguno, salvo cuando así lo determine una resolución jurisdiccional, no administrativa.

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

Precisó que la aplicación de penas y la imposición de sanciones en el lenguaje constitucional tienen una diferencia central; pues la primera corresponde al derecho administrativo, en tanto que la segunda, al derecho penal.

Estimó que no existe alternatividad para la prestación de trabajos en contra de la voluntad de las personas.

Recordó lo expresado en la exposición de motivos de las reformas penales de dos mil ocho, de donde se desprende una condición de reinserción de política criminal, restringiendo la imposición de este tipo de trabajos fuera de los términos y modalidades previstos.

Señaló diversos ordenamientos relativos a la prohibición de ejecutar trabajos forzosos y obligatorios, precisando algunas de sus características.

Manifestó que con independencia de la razón jerárquica entre un tratado internacional y la Constitución, la interpretación que se haga debe llevarse a cabo tomando los mayores elementos de beneficio establecidos en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución.

Indicó que si se observa que la autoridad administrativa impone un trabajo forzoso u obligatorio en contra de la voluntad de las personas y el artículo 21 constitucional lo permite; es necesario acudir a los tratados internacionales, ya que éstos otorgan una mayor protección, pues es más conveniente que la imposición de un trabajo forzoso se

aplique únicamente como consecuencia de un proceso penal y no de una determinación administrativa, manifestando que ahí encuentra el mayor beneficio, por lo que al ser contrarios los preceptos de la legislación de Yucatán, respecto del tratado internacional, debe darse preferencia a éste último, sin involucrar en absoluto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas se manifestó en el mismo sentido que el señor Ministro Cossío Díaz, coincidiendo con la propuesta de inconstitucionalidad que propone el nuevo proyecto, apartándose de algunas de las razones que sustentan esta declaratoria.

Señaló que en la última ocasión que se discutió la presente acción de inconstitucionalidad, se pronunció por el análisis del nuevo texto del artículo 1º de la Constitución, así como de los diferentes tratados internacionales aplicables; reconociendo que estos últimos ya fueron incluidos en esta nueva propuesta.

Precisó no compartir las consideraciones por las cuales se declara la invalidez de la norma, pues la interpretación que realiza el proyecto no es la más favorable para la protección de los derechos humanos de aquellas personas a las que se impone realizar un trabajo en contra de su voluntad, dejando de lado algunos aspectos que estimó importantes.

Recordó que en el año en que fue emitida la norma impugnada, el artículo 5º de la Constitución, al igual que ahora, establecía que sólo la autoridad judicial podía obligar a una persona a desempeñar un trabajo sin retribución ni consentimiento derivado de la imposición de una pena, lo que se modificó con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, toda vez que el artículo 21 constitucional prevé que la autoridad administrativa puede imponer como sanción por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, los trabajos forzados.

Señaló que con la reforma del diez de junio dos mil once, el artículo 1º constitucional, prevé una serie de principios obligatorios para este Tribunal Pleno, los cuales deben ser interpretados para dar una mayor protección a los derechos humanos conforme a los diversos instrumentos internacionales que el propio proyecto cita.

Indicó que tanto a nivel constitucional como en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, existe una prohibición tajante para que las autoridades administrativas impongan trabajos forzados cuando no tengan el carácter de pena por la comisión de un delito, llegando a la misma conclusión que propone el proyecto.

Manifestó que el trabajo forzoso u obligatorio como sanción a una conducta, únicamente puede ser impuesta por una autoridad judicial a través de proceso previo; sin embargo, en ocasiones no ocurre esto cuando la autoridad

administrativa aplica la sanción a un particular sin agotar un procedimiento que brinde estas garantías.

Consideró que parecería existir un conflicto entre el párrafo tercero del artículo 5, y los diversos tercero y cuarto del artículo 21, ambos de la Constitución Federal en relación con los tratados internacionales citados en la presente acción de inconstitucionalidad; lo que puede resolverse con una interpretación progresiva del sistema de protección de los derechos humanos consagrados en la Norma Fundamental.

Por ende, consideró que debe declararse la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, al no proteger los derechos humanos de las personas que se ubican en el supuesto normativo.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia reiteró que no existen vicios de inconstitucionalidad en estos preceptos, dando lectura al artículo 68 del ordenamiento impugnado.

Señaló que los códigos civiles son normas imperfectas, ya que establecen una serie de obligaciones de los padres hacia los hijos sin que exista sanción alguna por su incumplimiento. Manifestó que la norma impugnada cumple con un fin social y fundamental, toda vez que en la misma se contempla una medida preventiva y sólo en caso de que se desatienda esta primera medida, se establecería la sanción de trabajo a la comunidad.

Señaló que existe una diferencia entre un trabajo a la comunidad y un trabajo forzado; y precisó que en caso de que un tratado internacional se contraponga a lo previsto en la Constitución, deberá prevalecer ésta desaplicando el tratado.

Manifestó que los trabajos a favor de la comunidad sólo los podía imponer una autoridad judicial; sin embargo, a partir de la reforma constitucional, esta atribución también la tienen las autoridades administrativas, por lo que el propio artículo 5º constitucional permite que la autoridad administrativa restrinja esta libertad de trabajo en los casos previstos en la ley.

Indicó que en el caso concreto la normativa impugnada tiene como propósito la protección a menores de edad o incapaces respecto de aquéllos que tienen el deber de darles alimentos, a los que por el incumplimiento de lo previsto en la norma respectiva se les impone un apercibimiento con amonestación y, en caso de reiteración en la conducta referida, se les impone la sanción consistente en trabajos a favor de la comunidad.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano señaló que incorporaría al engrose las propuestas del señor Ministro Aguilar Morales en caso de así ser aprobadas por el Tribunal Pleno.

Consideró que ni en el derecho mexicano ni en la Constitución existen trabajos forzosos pues el trabajo a favor

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

de la comunidad es optativo y depende de la voluntad del que fue condenado a cumplirlo.

Indicó el significado del “trabajo a favor de la comunidad” de acuerdo al Código Penal Federal.

Precisó que se podrían hacer las supresiones y agregados que se aprueben al proyecto; sin embargo, sostuvo que la Constitución por sí sola da solución a los problemas que plantea la norma impugnada, sin necesidad de hacer imbricaciones a los tratados internacionales.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea precisó que el presente asunto es de los primeros en los que se pretende interpretar el artículo 1º constitucional a la luz de los derechos humanos.

Al respecto, recordó que ha sostenido que en virtud de la cláusula de interpretación conforme prevista en dicho numeral, se obliga a los jueces a reinterpretar la Constitución a la luz del principio pro persona; realizando un nuevo bloque de constitucionalidad que se refiere a una cuestión de validez más que de jerarquía, en el que se debe aplicar la norma más favorable a la persona. En ese tenor, se deben tomar la Constitución y los derechos humanos de fuente internacional, interpretándolos de manera complementaria y no contradictoria en beneficio de la persona.

Recordó que al abordarse el asunto por primera vez no se había aprobado la reforma constitucional en materia de

derechos humanos y se sostuvo que la referencia del artículo 21 a reglamentos debía interpretarse incluyendo a las leyes, por un argumento de mayoría de razón, es decir, si lo podía hacer un reglamento, con mayor razón lo podía hacer una ley.

En ese orden, estimó que ahora debe interpretarse desde otra perspectiva, sin necesidad de pasar por el artículo 21 constitucional, interpretando armónicamente la Constitución con los citados convenios internacionales que prohíben el trabajo forzoso, lo que no guarda relación con la esclavitud, sino con el trabajo que se debe prestar sin la voluntad de la persona y sin retribución alguna.

En relación con las consideraciones del señor Ministro Ortiz Mayagoitia relativas al interés superior del menor, estimó que no es posible sacrificar de manera completa el derecho del padre frente al interés superior del niño, porque pueden existir otras medidas que no están prohibidas en la Constitución ni en los tratados internacionales para lograr que los padres cumplan con la obligación de apoyar la rehabilitación de sus hijos; por lo cual consideró que la medida impuesta en la norma impugnada desde un análisis de ponderación, no estaría justificada porque no sería proporcional ni razonable.

Concluyó en el sentido de que debía declararse la inconstitucionalidad de las normas impugnadas pues de la interpretación armónica de la Constitución y de los derechos

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

humanos previstos en los tratados internacionales, se prevé un trabajo obligatorio a la comunidad en un supuesto no autorizado por la Constitución ni por los referidos tratados.

El señor Ministro Aguilar Morales cuestionó lo manifestado por el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea respecto de no analizar la constitucionalidad del precepto impugnado a partir del artículo 21 constitucional, siendo éste el que autoriza las sanciones a infracciones administrativas, así como el trabajo a favor de la comunidad. Manifestó interrogantes en cuanto a identificar los trabajos en favor de la comunidad con los trabajos forzosos u obligatorios, indicando no advertir diferencia entre estos últimos.

Agregó que los trabajos a favor de la comunidad no guardan relación con los trabajos forzosos u obligatorios, por lo que al referirse los tratados internacionales a una cuestión diversa, no es necesario señalar si deben prevalecer éstos o la Constitución.

Coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz en cuanto a ser diferentes constitucionalmente la imposición de penas y la imposición de sanciones administrativas, en la inteligencia de que los tratados internacionales no se realiza tal distinción al referirse a la facultad del Estado para imponer cualquier sanción.

Estimó relevante determinar si los trabajos a favor de la comunidad son una sanción que guarda relación con lo regulado en los tratados internacionales, considerando que

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

son cuestiones diferentes, lo que torna innecesario realizar una armonización ente éstos y aquélla.

Recordó lo previsto en el artículo 8º del Convenio 29 de la Organización Internacional de Trabajo como la única interpretación del “trabajo forzoso”, considerando que dicha definición no guarda relación con la imposición de una sanción administrativa para realizar trabajos en favor de la comunidad o de un particular.

Consideró que el realizar trabajos obligatoriamente y bajo la amenaza de una pena, sanción o castigo, podría considerarse como esclavitud, lo que está prohibido por el referido tratado internacional; sin que existan confrontas entre lo previsto en el artículo 21 constitucional y los tratados internacionales, por lo que en caso de considerarse inválido el precepto impugnado, no tendría que abordarse el estudio que realiza el proyecto relativo a la tipicidad, por lo que concluyó en el sentido de que el estudio relativo debía hacerse conforme al artículo 21 constitucional y no conforme a los tratados internacionales señalados pues no guardan relación con el tema.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó en contra de las consideraciones del proyecto y por la invalidez sólo de las porciones normativas que establecen como sanción el trabajo obligatorio a la comunidad.

Recordó que en el año dos mil diez propuso declarar la invalidez del precepto impugnado por considerar que la pena

debía ser impuesta por una autoridad judicial y que, posteriormente, se reformó el artículo 21 constitucional, ante lo cual sostuvo que la restricción a la libertad de trabajo debía interpretarse de manera estricta y no de manera amplia.

Estimó que el Tribunal Pleno se enfrenta ante un tema medular respecto de reforma constitucional en materia de derechos humanos que establece un marco de referencia diferente, a la luz del cual realizó su posicionamiento.

Recordó que el artículo 1º constitucional establece dos cuestiones: la obligación del análisis de la Constitución a partir la protección más amplia a las personas, así como la forma en que debe interpretarse esa aplicación de acuerdo a principios de interdependencia y progresividad de los derechos humanos, es decir, tomando en consideración todos los derechos humanos que eventualmente están involucrados para llegar a la solución, sin que se pueda perderse desde un ángulo el interés superior del menor que está en juego en estos aspectos, lo que sería una cuestión secundaria en función del primer aspecto que se debe resolver.

Consideró clara la definición que proporciona el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo respecto del trabajo forzoso u obligatorio, y estimó que el trabajo en favor de la comunidad no se encuentra en ninguna de las excepciones previstas para que un trabajo

obligatorio no se considere como prohibido, considerando que debía hacerse un análisis a la luz del artículo 21 constitucional a través de una interpretación conforme, estimando que debía interpretarse en el sentido de que se puede eventualmente permutar la imposición de otro tipo de sanciones por el trabajo a la comunidad, siempre y cuando exista el elemento esencial consistente en que se acepte voluntariamente por el sujeto, pues por lo general se prefiere esta pena al arresto por treinta y seis horas o a las sanciones que afectan seriamente la economía del sujeto.

En ese tenor, se manifestó a favor de la argumentación del señor Ministro Ortiz Mayagoitia para sostener la constitucionalidad en lo general de los preceptos impugnados y consideró que debía invalidarse la porción normativa que establece como sanción obligatoria por reincidencia, el trabajo obligatorio comunitario, estimando que de acuerdo a esta interpretación podría mantenerse el precepto constitucional y dar la mayor protección a las personas conforme a los tratados internacionales.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró adecuada la referencia que se hace a los tratados internacionales y en concreto al Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo, pues aunque no haya una coincidencia en cuanto a los términos al referirse al trabajo forzoso, que en ese concepto encuadra el trabajo en favor de la comunidad, estimando que ambos conceptos coinciden en lo general.

Precisó que debía abordarse el análisis del asunto a partir de la interpretación al artículo 1º constitucional, considerando ineludible la referencia y el análisis del diverso 21 del mismo ordenamiento que incorpora el trabajo a favor de la comunidad como una de las formas de sancionar faltas a los reglamentos gubernativos, en tanto que el referido Convenio Internacional, establece que la única manera en que se pueden imponer trabajos forzados es a través de una resolución judicial.

Indicó que este Alto Tribunal no ha precisado el alcance de lo previsto en el reformado artículo 1º de la Constitución, recordando que conforme a lo señalado en su párrafo primero, a esa Norma Fundamental se reserva la potestad de establecer restricciones a los derechos reconocidos en los diversos tratados internacionales.

Consideró que la Constitución sigue estando por encima de los tratados internacionales y precisó que el artículo 133 no ha sido reformado y establece que los tratados internacionales deben ser conformes con la Constitución, lo que obliga a hacer una interpretación extensiva pro persona y progresiva, sin que se pueda llegar al extremo de inaplicar un precepto constitucional en aras de llevar a cabo la aplicación de un tratado internacional.

Estimó que el análisis del proyecto es correcto en el sentido de la conclusión de la inconstitucionalidad del precepto pues éste no establece, ni siquiera, la opción de

elegir entre las diversas sanciones previstas en el artículo 21 constitucional, relativas a la multa, el arresto, y los trabajos en favor de la comunidad, precisando que los preceptos impugnados se refieren a un apercibimiento o amonestación, no a una multa y, en el caso de reincidencia, se refieren a los trabajos en favor de la comunidad.

Consideró que esta forma de manejar el análisis del precepto impugnado de acuerdo con las posibilidades previstas en el artículo 21 constitucional no es adecuada con la razonabilidad, pues el legislador previó una jerarquía en cuanto a la intensidad progresiva de las sanciones, estimando conveniente que el legislador de Yucatán, adoptara estos principios para establecer cierta discrecionalidad para la autoridad que impone las sanciones en cuanto al grado de la infracción o la intención de esa falta, por lo que, en esa parte, se manifestó a favor del proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza se manifestó por la invalidez del precepto, estimando suficientes las razones que éste propone, haciendo una confrontación a partir de los artículos 1º y 21 constitucionales y de los tratados internacionales. Recordó que existen condenas de la Corte Interamericana por el desplazamiento que se realice hacia un particular de una obligación del Estado en relación con el derecho a la salud.

El señor Ministro ponente Aguirre Anguiano indicó que el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo no es un tratado internacional.

El señor Ministro Aguilar Morales coincidió con la interpretación del señor Ministro Pardo Rebolledo respecto del artículo 1° constitucional y de que éste prevé los casos y condiciones en los que pueden restringirse las garantías; sin embargo, no consideró oportuno desentrañar lo previsto en este precepto, dado que los trabajos a favor de la comunidad no guardan relación con lo establecido en los tratados internacionales.

Consideró que las sanciones a que se refiere el artículo 21 constitucional son alternativas, sucesivas y tienen una prelación por la gravedad o por la reincidencia, dando lugar a que pueda elegir el afectado.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas indicó que no se refirió a que existiera una jerarquía de normas entre la Constitución y los tratados internacionales, sino a la aplicación de la norma más favorable a la persona.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto y los demás continuarían en lista, convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el jueves dos de febrero del año en curso, a partir de las once horas y levantó esta sesión a las trece horas con cincuenta y cinco minutos.

Sesión Pública Núm. 14

Martes 31 de enero de 2012

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.